

Sister Cities Press Statement

We, as citizens of the United States and members of a Sister Cities' delegation focused on migration, declare our solidarity with the Salvadoran people who decide to migrate to our country. We also resolve to work toward U.S. policy that supports the people of El Salvador in their right to a dignified life whether they choose to remain in their own country or to migrate.

Through our meetings with community organizers and a visit with a rural farming community, we have seen the role that U.S. policies have played in the political, economic and social landscape of El Salvador. Our country funded state and paramilitary armed forces who committed atrocities during the war and exported organized gangs back to El Salvador from Los Angeles. The US has also supported the privatization of public services, destruction of the environment, and crippling of the local agriculture by promoting free trade agreements such as CAFTA. This has made it impossible for local farmers to make a living from cultivating food crops. The US has promoted the mass production of sugar cane, which destroys the environment and provides a pittance to workers while enriching corporate executives. These policies contribute to the destruction of the social fabric of Salvadoran communities, breaking families through forced migration, creating fertile ground for gang recruitment and increased violence against women, youth, and LGBTQI people.

As leaders of both countries envision how to remedy root causes, they must consider the questions: development for whom and security from whom? Mega-projects such as the coastal train, water privatization, and construction of dams and freeways in natural areas enrich elites and transnational companies while destroying the environment and forcibly displacing people. This in turn feeds migration and the economic cycle of dependence on foreign development and income. It is time to invest in communities and explore creative economic alternatives that allow rural and urban communities to become self-sustaining. It is time to invest in opportunities for youth instead of further militarization that targets them as gang members and causes increased violence.

The United States cannot have it both ways in El Salvador: imposing a foreign policy that drives people from their homes and an immigration policy that criminalizes people as they flee in search of safety and sustenance for their families.

We condemn the policies of the Trump Administration that force migrants to seek more dangerous paths that endanger their lives, as we saw in the tragic deaths of Oscar and Valeria. We condemn the inhumane conditions where migrants are detained without access to life-saving medical care or basic necessities, just for exercising their legal right to seek asylum.

We call on the U.S. government to abandon repressive policies that endanger migrants such as the third country agreement with Guatemala, increased militarization of Mexico's southern border, and the 'Remain in Mexico' and metering policies that violate international asylum law. Instead of military funding and punitive cuts to social services, we call on our government to invest in health, education, and job opportunities in Salvadoran communities that provide youth a reason to stay and promise for a future in their country.

President Trump is using the threat of raids as a ploy to fund his \$4.5 billion funding package to lock up more immigrants in inhumane and life-threatening conditions. We want the Salvadoran people to know that many

U.S. citizens have marched in the streets to oppose Trump's inhumane policies, including thousands of people on Friday who held vigils at detention camps and legislative buildings in 700 locations across the country. As U.S. citizens who work with Salvadoran migrants as teachers and human rights defenders, we stand in solidarity with our brothers and sisters from El Salvador who, despite having risked everything in search of a better future, are routinely targeted for arrest and deportation and we want them all to know we are by your side in this struggle for a better life, for the life in peace that is yet to come.

Nosotros, como ciudadanos de los Estados Unidos y miembros de una delegación de Ciudades Hermanas enfocada en la migración, declaramos nuestra solidaridad con las personas salvadoreñas que deciden migrar a nuestro país. También nos comprometemos a luchar para lograr una política de los Estados Unidos que respalde al pueblo de El Salvador en su derecho a una vida digna, ya sea que elijan quedarse en su propio país o migrar.

Gracias a nuestras reuniones con organizadores sociales y una visita a una comunidad rural, hemos visto el papel que han desempeñado las políticas de los Estados Unidos en el panorama político, económico y social de El Salvador. Nuestro país financió las fuerzas armadas estatales y paramilitares que cometieron atrocidades durante la guerra y exportaron pandillas organizadas a El Salvador desde Los Ángeles. Los Estados Unidos también ha promovido la privatización de servicios públicos, la destrucción del medio ambiente y la paralización de la agricultura local mediante la promoción de acuerdos de libre comercio como el CAFTA. Esto ha hecho imposible que los agricultores locales se ganen la vida cultivando sus alimentos. Los Estados Unidos ha promovido la producción masiva de caña de azúcar que está dañando el medio ambiente y que enriquece a los empresarios, mientras se paga una miseria a quienes ahí trabajan. Estas políticas contribuyen a la destrucción del tejido social de las comunidades salvadoreñas, rompiendo familias a través de la migración forzada, creando un terreno fértil para el reclutamiento de pandillas y un aumento de la violencia contra las mujeres, los jóvenes y las personas de la diversidad sexual.

Si los líderes de ambos países buscan cómo remediar las causas fundamentales de este fenómeno, deben considerar estas preguntas: ¿desarrollo para quién y seguridad de quién? Los megaproyectos como el tren costero, la construcción de represas y autopistas en áreas naturales o iniciativas como la privatización del agua enriquecen a las élites y a empresas transnacionales mientras destruyen el medio ambiente y llevan al desplazamiento forzado de las personas. Esto, a su vez, promueve la migración y el ciclo económico de dependencia en desarrollo e ingresos extranjeros. Es hora de invertir en las comunidades y explorar alternativas económicas creativas que permitan que las comunidades rurales y urbanas se vuelvan autosuficientes. Es hora de invertir en oportunidades para la juventud en lugar de empujar la militarización que les acosa como si fueran miembros de pandillas y provoca un aumento de la violencia.

Los Estados Unidos no puede tener las dos cosas en El Salvador: imponer una política exterior que obliga a las personas a abandonar sus hogares y tener una política de inmigración que criminaliza a las personas que huyen en busca de seguridad y sustento para sus familias.

Condenamos las políticas de la Administración de Trump que obligan a los migrantes a buscar caminos más peligrosos que ponen en peligro sus vidas, como vimos en las trágicas muertes de Oscar y Valeria. Condenamos las condiciones inhumanas en las que se detiene a los migrantes sin darles acceso a atención médica o necesidades básicas para salvar su vida, solo por ejercer su derecho legal de buscar asilo.

Llamamos al gobierno de los Estados Unidos a abandonar las políticas represivas que ponen en peligro a los migrantes, como el acuerdo del tercer país seguro con Guatemala, el aumento de la militarización de la frontera sur de México, las políticas de "Permanecer en México" y una política de cuotas que viola la ley internacional de asilo. En lugar de fondos militares y cortes punitivos a los servicios sociales, llamamos a nuestro gobierno a invertir en salud, educación y oportunidades laborales en las comunidades salvadoreñas que den a la juventud una razón para quedarse y un verdadero futuro en su país.

El presidente Trump está utilizando la amenaza de las redadas como una estrategia para recibir \$ 4.5 mil billones para financiar su política de encerrar a más inmigrantes en condiciones inhumanas y que pone en peligro sus vidas. Queremos que el pueblo salvadoreño sepa que muchas personas estadounidenses están marchando en las calles para combatir estas políticas inhumanas, incluyendo a miles de personas que realizaron vigiliyas en campos de detención y edificios legislativos en 700 lugares de todo el país el pasado viernes.

Como ciudadanos de los Estados Unidos que trabajamos con migrantes salvadoreños como maestras y defensores de Derechos Humanos, declaramos nuestra solidaridad con nuestras hermanas y hermanos de El Salvador que, a pesar de haber arriesgado todo en busca de un futuro mejor, son el blanco habitual de los arrestos y deportaciones y queremos que sepan que marchamos junto a ustedes en su lucha por una vida mejor, por una vida con la paz que aún se espera.

Julio 2019

U.S.-El Salvador
Sister Cities
Ciudades Hermanas